

Señor

Juez del Circuito Administrativo (Reparto).

Buga.



DIEGO LEON CESPEDES SOLANO, mayor de edad, vecino de Tuluá, portador de la cédula de ciudadanía No 10523926 de Popayán, abogado titulado con T.P. 19676 del C.S.J., obrando como mandatario judicial de la señora Noralba Guzman Montoya, mayor de edad, vecina de Tuluá, a Usted respetuosamente le manifiesto que promuevo proceso administrativo en ejercicio de la acción de reparación directa, que consagra el artículo 140 del C.P.A.C.A., contra el Municipio de Tuluá, - Planeación Municipal, representado por su Alcalde Municipal Gustavo Adolfo Vélez Román o quien haga sus veces y la Curaduría Urbana de Tuluá, representada por el Curador Urbano o quien haga sus veces, y con citación del Ministerio Público, y con el fin de obtener el reconocimiento y pago total de los perjuicios MORALES, Y MATERIALES causados por el actuar irregular del Municipio de Tuluá y la Curaduría Urbana de Tuluá, al negarse a otorgar licencia urbanística al proyecto urbanístico vivienda multifamiliar 2 pisos Barrio Buenos Aires, ubicado en la Carrera 12 C No 26C-40 Lote 2, identificado con la cédula catastral No 01-01-0683-0019-000 y matrícula inmobiliaria No 384-112909 de la Oficina de Registro de I.I.P.P. de Tuluá, con lo cual se le han causado perjuicios al demandante.

#### 1.- PRETENSIONES

PRIMERA: QUE SE DECLARE administrativamente responsables al Municipio de Tuluá, -Oficina de Planeación Municipal- y a la Curaduría Urbana de Tuluá de los perjuicios materiales causados al demandante por la falla en el servicio al negarse el otorgamiento de la licencia urbanística al proyecto urbanístico vivienda multifamiliar 2 pisos Barrio Buenos Aires, ubicado en la Carrera 12 C No 26C-40 Lote 2, identificado con la cédula catastral No 01-01-0683-0019-000 y matrícula inmobiliaria No 384-112909 de la Oficina de Registro de I.I.P.P. de Tuluá, en el que la demandante posee el lote No 10.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la declaración anterior las entidades demandadas están obligadas al pago de las siguientes sumas por los perjuicios causados al accionante:



a) El pago de la suma de \$ 60.000.000 a título de perjuicios materiales, por concepto de las inversiones hechas por el demandante en la construcción del inmueble que posee en la Urbanización Buenos Aires, distinguido con el número 10 y cuya nomenclatura es Calle 26 D No 11-47.

b) El pago de la suma de cien sesenta salarios mínimos mensuales legales para el convocante, a título de perjuicios morales, por los daños causados a su salud debido a la aflicción y angustia que ha causado la negligente actitud de las entidades demandantes, frente a la indefinición de la licencia urbanística requerida para legalizar la situación del inmueble.

TERCERA: Que se reconozcan los intereses que se causen hasta que se efectúe el pago de la suma solicitada en las pretensiones anteriores.

## 2.-HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCION

a. Los lotes que conforman el proyecto urbanístico Urbanización Buenos Aires, corresponden a la siguiente relación, conforme al plano urbanístico así:

Lote No 01 Alfonso Ramírez Salas

Lote 03 Ana Joaquina Lorza Valencia

Lote 04 Luz Eddy Pulgarin Bedoya

Lote 05 Blanca Nelly Pareja Martínez

Lote 06 Carlos Arturo Riascos Bastidas

Lote 07 Nazly López Quintero

Lote 08 Pedro José Alzate Peña

Lote 09 María Elena Zuleta Rivera

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

Lote 10 Noralba Guzmán Montoya

Lote 11 Fabián Arlex Castro Tovar

Lote 12 Hallalith Torres Arango

Lote 13 Diana Marcela Ceballos Alzate

Lote 14 Luz Adriana Agudelo Torres.



b. El lote poseído por el accionante corresponde al No 10, hace parte del proyecto urbanístico denominado Urbanización Buenos Aires, desarrollado por la Junta de Vivienda Comunitaria Primero de Mayo.

c.- El Municipio de Tuluá, a través del Departamento Administrativo de Planeación, según oficio 260-09-11 de enero 06 de 2016, negó la solicitud de reconocimiento de existencia de edificaciones, a fin de legalizar la situación de cada uno de los predios aludidos, incluido el del accionante.

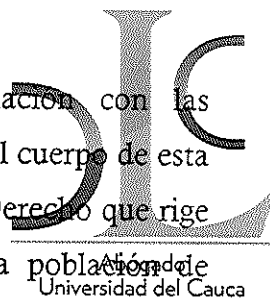
d.- La Curaduría Urbana de Tuluá, igualmente ha negado la solicitud para el reconocimiento de la existencia de las edificaciones y/o construcciones que el accionante ha realizado en el predio que posee.

e.- El lote poseído por el accionante ha sido mejorado con las siguientes construcciones y linderos: Lote No 10, Casa de habitación, que consta de un piso, dos piezas, una pieza con baño enchapado, cocina con piso en cerámica, sala comedor, servicio de baño. Los linderos de este predio son los siguientes: Norte Con predio de María Inés Gómez; Sur, Calle 26 D; Occidente, predio de Fabián Arlex Castro Tobar, Oriente con predio de María Elena Zuleta.

Las mejoras que se describen son las que constituyen los **perjuicios materiales** que se deprecian por esta demanda y a cargo de las entidades demandadas.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

f.- La actitud negligente de las entidades demandadas en relación con las construcciones realizadas por el accionante en el lote a que se alude en el cuerpo de esta demanda, es una violación flagrante del concepto de Estado Social de Derecho que rige al Estado Colombiano, mas tratándose de situaciones que afectan a población de estratos bajos.



g.- El Municipio de Tuluá – Oficina de Planeación Municipal y la Curaduría Urbana a pesar de todos los reclamos y solicitudes enviadas para el reconocimiento de la construcción hecha por el accionante se han negado sistemáticamente a solucionar tal situación.

h.- Todos los lotes que conforman el proyecto urbanístico Urbanización Buenos Aires , han venido pagado al Municipio de Tuluá, el valor del impuesto predial que la entidad municipal fija para el lote No 2 del Barrio Bueno Aires, tal como se comprueba con los recibos del impuesto que se acompañan con este libelo.

i.- El Municipio le otorgó al predio poseído por la demandante la respectiva nomenclatura.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 140 del C.P.A y C.A. consagra la acción de reparación directa para que el particular acuda a la jurisdicción en busca del resarcimiento de los daños causados por la acción o la omisión de las autoridades en el ejercicio de las funciones públicas a ellas asignadas.

El Consejo de Estado acerca de la responsabilidad estatal o de sus entes como lo es el caso del Municipio de Tuluá, ha señalado que: **“De ahí que bien puede predicarse que la responsabilidad del Estado se desprende de la obligación que nace para éste de reparar los perjuicios causados bien sea a la sociedad o a uno de sus miembros, como consecuencia del no cumplimiento, o del defectuoso cumplimiento o tardío cumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Constitución.... Pero, se repite, la responsabilidad estatal surgirá siempre que las autoridades pudiendo y debiendo hacerlo para el caso específico dejen que se desconozcan los derechos a la**

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

vida, honra y bienes de las personas residentes en el país por parte de otras personas o cuando el mismo Estado vulnera estos derechos”.



Con el actuar negligente de los entes demandados al negarse al reconocimiento de las construcciones existentes en el Lote 02 Barrio Buenos Aires, a pesar de la existencia de la Resolución 028 de septiembre 11 de 2009, mediante la cual se otorgó la Licencia Urbanística en la modalidad de subdivisión urbana, se incurrió en una responsabilidad objetiva, al violar las normas de carácter nacional y local – POT y constitucional.

Con posterioridad la Curaduría Urbana expidió la Resolución No 295 de junio 17 de 2013 mediante la cual declaró desistida la solicitud de licencia urbanística de construcción al exigir documentos que ya se encontraban en poder de dicha entidad, violando claras normas de orden administrativo y legal que impiden exigir los documentos que se encuentran en poder de las entidades públicas.

La falla del servicio por parte del Municipio de Tuluá y la Curaduría Urbana, es evidente y surge entonces la responsabilidad objetiva estatal al tenor de lo enseñado por el Consejo de Estado cuando señala que “Un daño será antijurídico cuando la víctima del mismo no está obligada por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por la norma jurídica..... Dentro del anterior perfil, la responsabilidad se torna objetiva, como lo enseña Leguina. No se trata de ningún perjuicio causado antijurídicamente, sino de un perjuicio antijurídico en sí mismo, por otra parte se desvincula de la licitud o ilicitud de la actuación de la que se deriva la lesión, con lo que se hace capaz de abarcar la totalidad de los supuestos de responsabilidad posibles “(Consejo de Estado. Sentencia del 6 de mayo de 1993. Exp. 7428. Consejero Ponente Julio Cesar Uribe Acosta.).

En Sentencia C-333 la Corte Constitucional ha predicado en relación con el citado artículo 90 Constitucional que “..... para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación

Diego León Céspedes  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

jurídico administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”.



#### MEDIOS DE PRUEBA

Sírvase tener como medios de prueba los siguientes:

a.- Copia de la Resolución No 028 de 11 de septiembre de 2009 expedida por la Curaduría Urbana de Tuluá ; b) Copia de la Resolución No 295 de junio 17 de 2013 expedida por la Curaduría Urbana de Tuluá, c) Copia oficio No 260-09-11 de fecha enero 06 de 2016 expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá; d) c) Copia del plano de la urbanización Buenos Aires; e) Copia del Oficio de fecha 23 de julio de 2015 presentado al Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá; f) Copia del oficio 260-30-01-2285 de fecha agosto 19 de 2015, originario del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá; g) Copia del Paz y Salvo Municipal ; h) Copia del pago de Impuesto Predial Unificado; i) Certificado de nomenclatura.

#### ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

La cuantía la estimo en la cantidad de Ciento treinta y un millones trescientos sesenta y siete mil trescientos pesos (\$101.367.300) discriminados así: a) La suma de Noventa millones de pesos (\$60.000.000) a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, por los dineros invertidos de su propio peculio por el accionante, en la construcción de su casa de habitación; b) La suma de sesenta salarios mínimos para la demandante a título de perjuicios morales por la aflicción y angustia causados al accionante por la actitud negligente de las entidades demandadas.

#### COMPETENCIA

Es usted competente para conocer de este trámite de conformidad con la ley 446/98, 640/01, 1285/09, 1437/11.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia

## ANEXOS

Los enunciados como pruebas documentales aportadas en el acápite respectivo, copia de la demanda para el traslado y en medio magnético y poder debidamente conferido.



## NOTIFICACIONES

El Alcalde del Municipio de Tuluá, en el Palacio Municipal de la Carrera 25 con Calle 25 esquina, [www.tulua.gov.co](http://www.tulua.gov.co).

El Curador Urbano labora en la Carrera 23 No 24-43 Centro Comercial La 23 Oficina 105.

Mi poderdante recibirá notificaciones en la Calle 26 D No 11-47 de la ciudad de Tuluá y no tiene obligación de tener correo electrónico.

El suscrito recibirá notificaciones en mi oficina de la calle 25 No. 24-53 de Tuluá, Tel. 3155218364, correo electrónico [diego\\_leon\\_25@hotmail.com](mailto:diego_leon_25@hotmail.com).

Atentamente,

  
Diego León Céspedes S.

C.C. 10'523.926 de Popayán

T.P. 19676 del C.S.J.

**Diego León Céspedes**  
Derecho Civil - Administrativo - Familia